

**SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2006
DEL SEÑOR DOCTOR WALTER VASQUEZ VEJARANO PRESIDENTE DEL
PODER JUDICIAL ANTE EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
OCURRIDO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2005.**

Señor Presidente:

Señores Congresistas:

Los Jueces de la República hemos venido al sagrado recinto de las leyes, con unci3n patri3tica para demostrar, en acci3n conjunta con la Representaci3n Nacional, que el Estado de Derecho tiene vida activa, plena vigencia, en el Per3.

Al Congreso de la Rep3blica corresponde, en este d3a hist3rico, reafirmar la esencia democr3tica de nuestra Rep3blica a trav3s de la reivindicaci3n econ3mica y moral que reclama el Poder Judicial.

El Poder Judicial, se3or Presidente, como es ampliamente conocido, es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y est3 aqu3, en este Congreso de la Rep3blica depositario de la soberana voluntad, para reclamar con c3vica firmeza el cumplimiento de la Constituci3n.

En aplicaci3n del art3culo 145° de la Carta Pol3tica hemos elaborado, a partir de mayo del presente a3o, el Presupuesto Institucional. Estamos aqu3 para sustentarlo conforme, asimismo, faculta la Constituci3n.

Y es oportuna esta, Se3or Presidente, para actualizar dos pronunciamientos recientes.

Sabido es que el Se3or Presidente del Consejo de Ministros acaba de declarar durante una gira por Estados Unidos que corresponde al Poder Judicial generar sus propias rentas. Repite, as3, lo expuesto antes en esta Capital.

Actualizo, asimismo, el reciente anuncio del Jefe de Estado, registrado en el Diario Oficial, edici3n del viernes 18 del presente mes y que textualmente

expresa: “Nosotros vamos a apoyar decididamente al Poder Judicial. Haremos todo lo posible para apoyarlo económicamente pero tenemos que hacerlo dentro de las posibilidades económicas del país”.

“Nuestro objetivo –dijo el Señor Presidente Constitucional de la República- es respaldar al Poder Judicial que tiene abundante carga procesal”.

Destaco ambas posiciones, señor Presidente, por cuanto el primer mandatario y el Presidente del Consejo de Ministros, porque tienen un común denominador, aunque con diferentes matices: reconocen la necesidad de incrementar los recursos económicos al Poder del Estado que represento.

Y no puede ser de otra manera, señor Presidente, por cuanto a diferencia del criterio de tan altos dignatarios, el Ministro de Economía ha hecho llegar a este Congreso un Proyecto de Presupuesto al margen de los principios constitucionales y al margen de las elementales necesidades del Poder Judicial.

En efecto, ordena el artículo 145° de la Carta Fundamental que corresponde al Poder Judicial elaborar su Proyecto de Presupuesto; lo presenta al Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso.

El artículo 38° de la Carta Política, señor Presidente, obliga a todos los peruanos respetar la Constitución.

Pero he aquí, señor Presidente, que mientras el Poder del Estado que represento, fiel al mandato de tal elevada jerarquía, remitió al Ministerio de Economía su Proyecto de Presupuesto elaborado con sentido descentralista, participativo y por resultados; el Ministro de Economía optó por no sujetarse a la Constitución por las siguientes razones:

- Se sustituyó al Poder Judicial y nos hizo nuestro Presupuesto sin tomar en cuenta el proyecto judicial.

- Estableció cuales son las necesidades sin conocerlas, y como si no existiéramos los jueces en la faz de la tierra, incluyó su proyecto en el Proyecto de Ley de Presupuesto.

Pero como el Ministerio tenía y tiene en su poder nuestro proyecto remitido al Ejecutivo con tres meses de anticipación a la entrega del Proyecto de Ley a esta Representación Nacional, lo ha remitido al Congreso como añadido.

Este modo de tratar la cosa pública, señor Presidente, no debe palidecer el Estado de Derecho.

Es imperioso que este digno Congreso marque una diferencia indispensable, sustancial, entre el procedimiento constitucional en materia presupuestaria adoptado por el Poder Judicial y la tradicional forma de intervención del Poder Ejecutivo en lo que a cuantificación de nuestras necesidades se refiere.

Nosotros, señor Presidente, para elaborar nuestro Presupuesto institucional hemos recogido la realidad de los 28 Distritos Judiciales del país, auscultando y confrontando las necesidades en el escenario mismo de los hechos.

Se han efectuado durante los meses de mayo y junio 5 talleres macroregionales, en las ciudades de Arequipa, Chiclayo, Iquitos, Huancayo y Lima, con la participación de jueces de todas las instancias, las cámaras de comercio, las autoridades eclesiásticas, las autoridades políticas de los gobiernos regionales y locales, así como los representantes de organizaciones sociales de base y de la sociedad civil en general.

El Ministerio de Economía no ha hecho así.

Nosotros, señor Presidente, hemos elaborado un presupuesto para el año fiscal de manera diferente, inédita en base a orientaciones programáticas de corto, mediano y largo plazo.

Nuestro presupuesto es participativo porque se ha hecho no solamente considerando Lima y con intervención de la comunidad.

Es descentralista porque busca que cada Corte Superior se vaya constituyendo en una unidad ejecutora para administrar su propio presupuesto tomando decisiones que solo se toman en Lima.

Y, lo que es importante, por primera vez el Poder Judicial no solo sustenta sol a sol de 1,157 millones de nuevos soles que requiere del Tesoro Público sin los cuales sería incapaz de lograr resultados concretos Corte por Corte.

Cada año, señor Presidente, ingresan 1,400,000 expedientes y sólo podemos procesar algo menos de 1,100,000. Es decir, de cada 100 expedientes que ingresan en el año, solo podemos procesar 80 expedientes, con lo cual al cabo de 5 años tenemos el retraso de 1. Hoy en día tenemos un retraso cercano a los 2 años, razón por la cual estamos programando, en noviembre de este año, vista de causas para junio o julio del año entrante.

Esta gran dilación concurre a crear, lamentablemente, un escenario para que malos elementos incurran en inconductas funcionales.

La situación económica del Poder Judicial, Señor Presidente, es deplorable.

No solamente no disponemos de una infraestructura física adecuada sino que, incluso ponemos en peligro la seguridad de los litigantes cuando concurren a los recintos judiciales.

Fíjense, señores Congresistas, en qué condiciones materiales administramos justicia. Aprencien la realidad de postergación en la que se encuentra el Poder Judicial. Fíjense en qué situación se encuentran los archivos. Aún trabajamos con máquinas de escribir. ¿Cómo en estas condiciones materiales se le exige al Poder Judicial celeridad en los procesos?. Hasta cuando vamos a comprender que Lima no es el Perú y que la situación de las salas y juzgados en provincias es realmente calamitosa.

Nuestros recursos humanos son escasos. Necesitamos crear más juzgados y salas en toda la República; debemos extender el uso de la tecnología para incrementar nuestra productividad. Necesitamos tener acceso a Internet y conectarnos con la base de datos de Reniec, Policía Nacional, la Sunat y otros organismos con los cuales, pese a estar en el Siglo XXI, seguimos coordinando a base de oficios la información pertinente.

Nuestro proyecto de Presupuesto está perfectamente alineado no solo con la visión que tenemos de este Poder del Estado o sea un Poder Judicial real y efectivamente autónomo e independiente, moderno, accesible, eficiente, oportuno, con capacidad directriz de sus representantes y órganos de gobierno; con magistrados, auxiliares jurisdiccionales y administrativos premunidos de mística e identificación institucional, que gocen de estabilidad y capacitación permanente; con planteamientos esenciales de cada uno de los ejes temáticos considerados en los distintos procesos de análisis, evaluación y planeamiento en los que incluso este Congreso ha tenido trascendente participación.

En este sentido, tal como obra en los documentos que se les ha hecho entrega, se disponen de lineamientos de política de largo y mediano plazo en los siguientes ejes temáticos: acceso a la justicia, políticas anticorrupción, modernización de los despachos judiciales, recursos humanos, predictibilidad y jurisprudencia y reforma procesal penal. De dichos lineamientos se desprenden acciones de corto plazo con resultados concretos que alcanzar y un inventario de recursos necesarios para el efecto.

En los que se refiere a acceso a la justicia se pretende facilitar un adecuado y universal acceso a los servicios, promoviendo medios alternativos de solución de conflictos, potenciando la justicia de paz, y brindando a la ciudadanía información actualizada sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Para ello en el año 2006 deben crearse 253 órganos jurisdiccionales, se implementarán juzgados de paz en comisarías, se hará un inventario real de los expedientes judiciales, se promoverá la conclusión anticipada y la conciliación judicial.

Estas acciones tendrán un costo de cerca de 219 millones y sólo se podrán realizar si esta Representación Nacional decide apoyarnos financieramente con recursos.

Por otro lado, se espera implementar la participación de la sociedad civil en los órganos de control e impulsar la función preventiva, fiscalizadora y correctiva de la OCMA.

Asimismo, de contarse con los recursos necesarios, se podrán implementar Consejos Ejecutivos Distritales, Unidades Ejecutoras y una estrategia de capitalización patrimonial en este Poder del Estado.

En el área temática Recursos Humanos se plantea implementar una Nueva Escala Salarial para los auxiliares jurisdiccionales a fin que de progresivamente alcances remuneraciones dignas.

En tanto, que en el eje temático Reforma Penal se plantea el inicio de implementación del nuevo Código Procesal en el marco de una operación piloto en los Distritos Judiciales de Huaura y La Libertad para lo cual se requieren recursos adicionales de cerca de seis millones de nuevos soles.

Como se podrá apreciar no solo se disponen de lineamientos programáticos plurianuales sino que la elaboración de nuestro proyecto de presupuesto institucional ha sido un ejercicio concreto de vinculación armoniosa entre la planificación, la programación y la presupuestación con acciones y resultados cuantificados. Sabemos que hacer en cada Corte y que logros esperamos alcanzar.

En consecuencia, si la Representación Nacional nos otorga recursos financieros adicionales solicitados, podremos en el Distrito Judicial de Junín, por ejemplo, crear entre otros una Sala Descentralizada en Tarma, implementaremos dos juzgados civiles en el Tambo, crearemos un Juzgado Penal en la Merced, fortaleceremos la Central de Notificaciones; con ello

esperamos reducir en 12 por ciento la carga procesal de los juzgados civiles y el 30 por ciento de los juzgados penales, incrementando adicionalmente en 20 por ciento la producción anual.

Análogamente, en la Corte de Lima, por ejemplo, se ha previsto crear, entre otros, 4 salas contencioso administrativas, y otros juzgados; así como cinco salas civiles y 4 juzgados de paz letrados en las comisarías de Ate, Miraflores, Lince y Chorrillos.

Se espera así duplicar la capacidad para realizar audiencias en las salas penales, reducir la carga procesal contencioso administrativa en 40 por ciento y en 50 por ciento en el caso de los procesos civiles, con lo cual los procesos demoraría un promedio de un año o menos y no dos como ocurre actualmente. El detalle de las acciones y resultados para cada una de las Cortes Superiores está su disposición, distinguidos Congresistas, en el documentos que se les ha hecho entrega.

Por último, queremos informar a la Representación Nacional que el cambio en el Poder Judicial ya ha empezado, pero se detendrá de no contar con los recursos mínimos indispensables. En efecto, optimizando el uso de los escasos recursos presupuestarios de los que disponemos, hemos dado inicio a este proceso de Reforma y Modernización del Poder Judicial, de cara al ciudadano.

Sí señores, no todo es malo en el Poder Judicial. Y la gran voluntad de cambio y ética en el servicio público que impulsa a la gran mayoría de jueces honestos a seguir mejorando. Se han implementado 1 sala y 7 juzgados anticorrupción, hemos interconectado 20 de las 28 cortes superiores quedando para el año próximo la conformación de un segundo anillo telemático que interconecte el resto de las dependencias periféricas a las sedes distritales (Juzgados de Paz Letrados, Especializados y Mixtos), se ha implementado el Registro Nacional de Requisitorias con una base de datos centralizada, en breve concluirá una primera etapa con la integración de 13 Distritos Judiciales al sistema del Registro Nacional de Condenas, con lo cual la expedición de un certificado de

antecedentes penales no demorará 20 días sino entre 5 y 20 minutos; asimismo, se han creado 8 Juzgados de Paz Letrados en Comisarías.

Se ha suscrito un convenio de cooperación interinstitucional con la Contraloría General de la República y la Fiscalía de la Nación para fortalecer las capacidades de los magistrados en la lucha contra la corrupción mediante el acceso a servicios de capacitación especializada. Asimismo, la OCMA está trabajando con la Contraloría General de la República para la revisión de las declaraciones juradas y rentas de los magistrados y en poco tiempo daremos una señal más de efectiva transparencia a la ciudadanía al disponer la obligatoriedad de presentar información patrimonial no sólo de los jueces sino también de los secretarios y de los familiares directos (padres, hijos, hermanos y cónyuges) de ambos trabajadores.

Se ha mejorado la Página Web del Poder Judicial para brindar información gratuita a la población sobre los siguientes servicios: (i) Trámites judiciales de los procesos más frecuentes, tales como cambio o adición de nombres, adopción, tenencia de menores, permiso para los viajes de menores, desahucio, prescripción adquisitiva, entre muchos otros.; (ii) Diccionario jurídico; (iii) Consultas jurídicas a cargo de especialistas; (iv) Aranceles Judiciales, es decir las tasas que los justiciables deben pagar al iniciar o continuar cualquier acción judicial, entre otros.

Asimismo, por primera vez se ha obtenido un Dictamen Limpio de los Estados Financieros Auditados para el Año Fiscal 2004 y durante el primer semestre del 2005, se ha alcanzado un nivel óptimo en el desempeño institucional, conforme a los criterios de medición previstos en la Directiva de Evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas.

En suma, distinguidos señores Congresistas, lo expuesto no hace más que reflejar la profunda convicción de las autoridades e integrantes del Poder Judicial por iniciar una verdadera y sostenida transformación en la Administración de Justicia para avanzar hacia un Poder Judicial que esté a la

altura de las circunstancias que exige la ciudadanía y que demanda el proceso de desarrollo peruano.

Finalmente, sólo quiero enfatizar que de no contarse con los recursos suficientes, no se ejecutarán las siguientes actividades y proyectos originalmente programados:

1. No se crearán los 253 nuevos órganos jurisdiccionales ni se fortalecerán los 820 órganos jurisdiccionales existentes, orientados a superar la agobiante carga procesal y revertir la acumulación de expedientes judiciales pendientes de solución que se viene registrando anualmente debido a la insuficiente capacidad operativa. En otras palabras, los expedientes se seguirán acumulando y los procesos judiciales demorarán más de lo que actualmente tardan puesto que el Poder Judicial no podrá procesar en promedio ni siquiera el 80% (como sucede hoy en día) de los procesos que se iniciarán en el año 2006.
- No se dará inicio a la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, con todo lo que ello significa en materia de agilidad y transparencia de los procesos en dicha materia, con lo cual todos los beneficios que para los litigantes implica la aplicación del nuevo código no se concretarán.
 - No se llevará a cabo el proceso de descentralización administrativa, cuya programación responde a la necesidad que progresivamente cada Corte administre su propio presupuesto como Unidad Ejecutora. Asimismo, no se pondrán en funcionamiento los Consejos Ejecutivos Distritales que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, y cuya implementación está orientada a fortalecer la gestión jurisdiccional y administrativa en las Cortes Superiores de Justicia del país.
 - No se llevará a cabo un conjunto de Proyectos de Inversión orientados a mejorar la infraestructura del Poder Judicial, el cual tendrá que continuar pagando alquileres incluso hasta por locales no adecuados ante no disponibilidad física de ambientes propios, hecho que constituye uno de

los puntos críticos para mejorar la prestación del servicio judicial y cuya programación se efectuó en el marco de una política de capitalización patrimonial.

- No se implementará una nueva escala salarial ni mejores condiciones de trabajo a favor del personal jurisdiccional y administrativo, cuya programación se efectuó en el marco de una política de fortalecimiento de capacidades que privilegia el adecuado desempeño laboral y la retribución de acuerdo al grado de responsabilidad y complejidad de funciones, el ascenso meritocrático y la evaluación del desempeño, entre otros aspectos.
- No se producirá la nivelación de pensiones ni el pago de la compensación por tiempo de servicios de ex Magistrados, así como tampoco sus respectivos devengados originalmente propuestos.
- No se podrán interconectar telemáticamente las dependencias judiciales ante la imposibilidad de dotarlas de los equipos informáticos y de telecomunicaciones por falta de recursos, con lo cual seguiremos en muchas dependencias trabajando manualmente y con máquinas de escribir.
- No se podrá llevar adelante el proceso de capacitación y fortalecimiento de competencias de los magistrados en las distintas instancias, incluyendo a la Justicia de Paz, ni tampoco se podrá avanzar en la sistematización y difusión de la jurisprudencia con lo cual, la efectividad de los esfuerzos por tener una justicia predecible serán prácticamente nulos.

En suma, la administración de justicia en el Perú no solo no mejorará sino que empeorará frente al crecimiento inercial de la carga procesal del año 2006. Nosotros los jueces, ya no seremos responsables de que la transformación del Poder Judicial se produzca y que el servicio mejore, pues depende de que

ustedes, en una actitud coherente y responsable, asignen los recursos presupuestarios necesarios para tal efecto.

Todos los sectores requieren recursos, pero como de costumbre, la distribución de los mismos entre fines alternativos es una cuestión de prioridades claras y voluntad política.

Señor Presidente, Señores Congresistas. Nosotros los Jueces de la República, tenemos la voluntad de llevar adelante este proceso de Reforma y Modernización, sabemos como hacerlo, estamos mejorando incluso dentro de las restricciones existentes, pero todo tiene un límite. Ya no podemos seguir avanzando sin disponer de los recursos materiales suficientes. No le hagamos el juego a la corrupción y a esas fuerzas ocultas que durante la década pasada infestaron los medios de comunicación y las instituciones gubernamentales y que lamentablemente hoy en día aún tienen gran poder.

Dependerá entonces de ustedes, del apoyo que estimen pertinente brindar a este Poder Judicial, para que el ciudadano de a pie, recupere la Fe y la Esperanza en la Justicia de nuestro país y se consolide el Estado de Derecho y la Institucionalidad Democrática que tanto esfuerzo le ha costado a la sociedad peruana recuperar.

Muchas gracias.